



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Ejecutivo singular
DEMANDANTE	Leasing Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento
DEMANDADO	Cooperativa de Salud San Esteban IPS, Néstor Raúl Maya Maya, Alianzas en Salud S.A.S. y María Claudia Mejía Londoño
RADICADO	05001 31 03 015 2016 00193 01
DECISIÓN	Revoca auto apelado

Medellín, siete de marzo de dos mil veinticuatro

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. En providencia de 2 de mayo de 2023 el Juzgado 003 de Ejecución Civil del Circuito de Medellín, decretó la terminación del proceso ejecutivo de la referencia por desistimiento tácito. Como fundamento de la decisión, tuvo en consideración que el trámite contaba con auto que ordenó seguir adelante con la ejecución y la parte interesada dejó transcurrir más de 2 años sin hacer ninguna actuación, pues desde el 3 de diciembre de 2019 no tuvo gestión alguna.

1.2. Inconforme la decisión, el apoderado judicial de la parte ejecutante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación con el fin de que se revocara lo resuelto y en su lugar se diera trámite a la solicitud presentada el 10 de abril de 2023. Para tal efecto, sostuvo que la actuación del despacho desconoció el memorial radicado el 10 de abril de 2023, mediante el cual se solicitó el decreto de medidas cautelares y sustitución de poder, petición que no fue resuelta.

1.3. Surtido el traslado sin pronunciamiento de la contraparte, en proveído de 24 de enero de 2024, el juzgado de primer nivel resolvió el recurso de reposición de manera desfavorable, por lo que mantuvo incólume la decisión y concedió la alzada.

Las razones de lo resuelto se centraron en que la última actuación registrada en el proceso era de 2 de diciembre de 2019, de ahí que los argumentos expuestos por el recurrente no eran de recibo, en primer lugar, porque el término de 2 años de inactividad está plenamente establecido en el literal b) del artículo 317 del C.G.P., en segundo lugar, porque si bien el literal c) de la misma norma, indica que cualquier actuación interrumpirá los términos previstos en dicho artículo, lo cierto es que esa circunstancia no se demostró en el caso *sub judice*, toda vez que, la solicitud de 10 de abril de 2023, se presentó dos años después de la última actuación, superando inclusive, el término de suspensión por la pandemia, en ese orden no era posible interrumpir un término que fue causado.

CONSIDERACIONES

2.1. El numeral 2 del artículo 317 del Código General del Proceso establece el desistimiento tácito como sanción a la inactividad de la parte. Al respecto, la norma en cita señala:

"ARTÍCULO 317. DESISTIMIENTO TÁCITO. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

...

2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes.

El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:

...

b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años;

c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo;

d) Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas;

e) La providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo;

...”.

2.2. En relación con esta figura procesal, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC11191 de 2020 precisó lo siguiente:

“Entonces, dado que el desistimiento tácito» consagrado en el artículo 317 del Código General del Proceso busca solucionar la parálisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, la «actuación» que conforme al literal c) de dicho precepto «interrumpe» los términos para que se «decrete su terminación anticipada», es aquella que lo conduzca a «definir la controversia» o a poner en marcha los «procedimientos» necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer.

En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que, «[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi»

carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo «ponen en marcha» (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020).

Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que además que allí se afirma que el «literal c» aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jurídica. No obstante, dado que prevén hipótesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cuál es la «actuación eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento».

Como en el numeral 1º lo que evita la «parálisis del proceso» es que «la parte cumpla con la carga» para la cual fue requerido, solo «interrumpirá» el término aquel acto que sea «idóneo y apropiado» para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el término de treinta (30) días, solo la «actuación» que cumpla ese cometido podrá afectar el cómputo del término.

En el supuesto de que el expediente «permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación (...) en primera o única instancia», tendrá dicha connotación aquella «actuación» que cumpla en el «proceso la función de impulsarlo», teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo.

...

Si se trata de un coercitivo con «sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución», la «actuación» que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las «liquidaciones de costas y de crédito», sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligación cobrada.”

CASO EN CONCRETO

En el caso bajo examen, el recurso formulado plantea resolver si el juez de primer grado tuvo razón al decretar la terminación del proceso ejecutivo por

desistimiento tácito, por considerar que se encontraban dados los presupuestos procesales previstos en el numeral 2 del artículo 317 del C.G.P. porque, la última actuación databa de 2 de diciembre de 2019.

Al respecto se advierte que lo definido por el juez no concuerda con la explicación impresa por la Corte Suprema de Justicia respecto a los actos que interrumpen los términos para la procedencia del desistimiento. En efecto, al revisar el expediente se observa que, el 10 de abril de 2023 el apoderado judicial del extremo procesal demandante allegó memorial en que solicitó el "i) *Embargo de cuenta corriente número 362-582956-05 de Bancolombia cuyo titular es Cooperativa de Salud San Esteban*; ii) *Embargo de cuenta corriente número 313-582956-05 del Banco Agrario de Colombia cuyo titular es Cooperativa de Salud San Esteban*; iii) *Embargo de los salarios a favor que tenga el demandado Cooperativa de Salud San Esteban, en las siguientes entidades: Coomeva E.P.S., Nueva E.P.S. y Comfenalco*". Junto con el escrito de solicitud de medidas cautelares se arrió sustitución de poder del abogado Bernardo Luján Gómez, apoderado de Leasing Bancoldex S.A. en favor de Raúl Giovanni Montenegro González.

Después, el despacho de primer grado en auto del 2 de mayo de 2023 decretó el fin del proceso por desistimiento tácito al concluir que el término de 2 años previsto en el numeral 2 del artículo 317 del Código General del Proceso operó, ya que la última actuación era del 3 de diciembre de 2023 (sic). No obstante, el juzgado de instancia omitió considerar la solicitud de medidas cautelares presentada por el apoderado de la parte ejecutante, la cual tenía la virtualidad de interrumpir el término establecido en la norma mencionada, pues de acuerdo con el precedente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el concepto de "*cualquier actuación*" consignado en el literal c) del numeral 2, consistente en una actuación tendiente a dar impulso al proceso y no cualquier gestión, que en los casos en que el proceso ejecutivo cuente con auto que ordene seguir adelante con la ejecución, será la que está dirigida a satisfacer la obligación cobrada. En efecto, la solicitud de medidas cautelares está dirigida a la satisfacción de la deuda.

Ahora, el juez no tuvo razón al concluir que la gestión de la parte demandante no interrumpió el término para decretar la terminación por desistimiento tácito,

porque se hizo después de transcurrido el término de 2 años desde la última actuación (2 de diciembre de 2019), pues la sanción de terminación anormal del proceso por desistimiento tácito y su término, no es una figura que opere de manera automática y si al momento en que el juez se aprestó a decretar el desistimiento mediaba una solicitud de la parte demandante, de medidas cautelares lo que correspondía era resolver ese pedimento porque desde esa actuación de la parte interesada (10 de abril de 2023) el lapso de los 2 años de que trata la norma comenzaba a correr nuevamente.

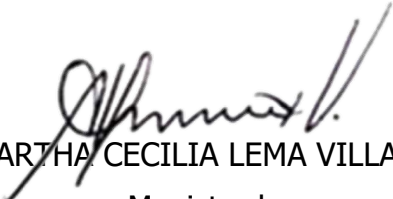
En consecuencia, el auto de 2 de mayo de 2023 proferido por el Juzgado 003 de Ejecución Civil del Circuito de Medellín, será revocado y en su lugar se ordenará dar el trámite respectivo al proceso.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR la decisión adoptada en auto de 2 de mayo de 2023, proferida por el Juzgado 003 de Ejecución Civil del Circuito de Medellín y en su lugar se ORDENA al despacho en mención dar el trámite respectivo al proceso.

SEGUNDO. Sin condena en costas ante la prosperidad del recurso.

NOTIFÍQUESE



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada